



DESAJCLO20-3835

Santiago de Cali, septiembre 18, 2020

Señores

JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI

E. S. D.

Referencia.: Expediente No. 2020-00075

Acción de Reparación Directa

Demandados: Nación – Rama Judicial

Actor: CRISTHIAN CASTRO Y OTROS

JAIME ANDRES TORRES CRUZ, Vecino de Cali, con cédula de ciudadanía No. 1.144.034.468 de Cali- Valle, y Tarjeta Profesional de Abogado No. 259000 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado de la Nación - Rama Judicial en el proceso de la referencia, según poder adjunto otorgado por la Directora Seccional de Administración Judicial conforme el artículo 103 numeral 7 de la Ley 270/96, y en el término legal, procedo a **CONTESTAR LA PRESENTE DEMANDA**, dentro del proceso que nos ocupa.

PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto como se demostrará en el presente escrito, no se reúnen los requisitos para que con los nuevos lineamientos jurisprudenciales se pueda atribuir responsabilidad por daño antijurídico a la Nación Rama Judicial, pues no hubo Privación Injusta de la Libertad.

HECHOS

En relación con los hechos narrados que hagan referencia a calificaciones subjetivas o apreciaciones el demandante, me permito manifestarle al honorable despacho que ninguno de ellos me consta, razón por la cual me atengo a lo que resulte probado en legal forma dentro del proceso.

En lo que haga referencia a actuaciones procesales, se aceptan los hechos de conformidad con la literalidad de los documentos allegados en debida forma al expediente y sin ninguna calificación subjetiva.

RAZONES DE DEFENSA

Que en escrito de acusación se menciona que:

“El día 21 de junio de 2014, a las 18:20 aproximadamente, cuando a la altura de la carrera 12 con calle 12 del barrio Simón Bolívar de Jamundí, se hallaba la patrulla 20-06 integrada por los patrulleros JEINER LUCUMI CARACAS y JOHNATAN HERNANDEZ LOPEZ, realizando patrullaje, momento en el que ellos manifiestan que escucharon detonaciones cerca, al llegar a la carrera 13 N. 21 -52, barrio la Lucha de Jamundí, donde funciona un taller de mecánica.

Que posteriormente manifestaron observar a un sujeto de tez trigueña, de aproximadamente 1.70 de estatura, vestido con camiseta de color verde manga corta, pantalón azul claro, disparando arma de fuego en contra de una persona que se hallaba en el suelo, quien fue identificado como VICTOR ANDRES GARCIA BURGOS, de 28 años de edad, quien estaba arreglando el vidrio de su vehículo junto con su hermano, quedando con heridas de gravedad el mecánico LUIS ALFONSO AGUIRRE SERNA, quien posteriormente más exactamente el día 24 de junio de 2014 fallece en la clínica Valle del Lili a causa de estas heridas .

Que la patrulla emprende la persecución del sujeto que disparo, quien aborda un vehículo de color blanco de placa BTF 043 que se encontraba a 10 metros aproximadamente del lugar de los hechos, tomando la calle 11.

Los patrulleros solicitan apoyo por radio, razón por la cual acuden uniformados adscritos a estación de Policía La María de Cali, desplazándose a la avenida Cañas Gordas, al llegar al sector de la finca la quesada, observan como descienden de un vehículo Mazda de color blanco de características similares a las reportadas, dos hombres de tez trigueña, contextura delgada, quienes disparan en contra de las patrullas que llegaban en apoyo, huyendo hacia los arbustos, los uniformados de la estación de Jamundí en apoyo

ingresan por los arbustos a fin de continuar con la persecución de los dos sujetos que habían descendido momentos antes del vehículo sin lograr su captura.

Entre tanto Policía de la Estación de la María revisa el vehículo abandonado escuchando el timbre de un celular marca Nokia de color negro, el cual se hallaba tirado la lado de la palanca de cambios, manifiestan que observaron en la pantalla del celular el apodo "tocayo" procediendo a contestar el teléfono, escucha una voz masculina que dice "marica como le fue con la vuelta" responde el uniformado "no marica estábamos haciendo esa vuelta y los tombos se nos pegaron nos persiguieron y nos tocó dejar el carro tirado" preguntándole la persona donde está, el uniformado le precisa que en un cañaduzal, el responde: "escóndase y espere a que los tombos se vayan y los recojo, cuando yo este legando pito tres veces y me sale de una para que nos abramos para que los tombos no nos cojan". De inmediato el uniformado comunica al T.E. HERNANDEZ CARRERO JHONATAN, comandante de la estación de Policía La María, quien ordena el retiro de varias patrullas y su reubicación estratégica a fin de esperar el momento en que fuesen a recoger a los prófugos.

Los uniformados manifiestan que mientras esperaban sonó nuevamente el celular, entrando una llamada del abonado celular 3207832950, al contestar el uniformado, una voz masculina dice "marica ya hizo la vuelta" respondiendo que ya la había hecho, pero se le habían pegado los tombos y les había tocado dejar el carro tirado, manifestando el sujeto "marica como así pero ese carro está a nombre mío, pero se encuentran bien respondiendo que si a lo que el sujeto expresa que por el vehículo no hay problema pues mas tarde lo reporta como hurtado colgando la llamada.

Que pasados unos minutos manifiestan los uniformados que vieron arribar un vehículo de servicio público taxi, pitando tres veces, razón por la que es inmovilizado, hallándose en el interior el señor WILLIAM SALAS LAHINEZ y el señor ELMER QUENOVI OSORIO, el uniformado en presencia de estas personas marca el número que le figuraba a "tocayo" sonando inmediatamente el celular que llevaba consigo el señor PEDRO ELMER, en el bolsillo del pantalón, razón por la que son capturados, al estar en este timbra nuevamente el teléfono hallado en el vehículo abandonado, observando en la pantalla el nombre de "DON CARLOS", al contestar una voz masculina que calcularon los policiales entre 45 a 50 años aproximadamente dice "que hubo mijo donde están" responde el uniformado que se halla en un cañaduzal, el sujeto pregunta "que se calentó la vuelta" y el uniformado le dice que sí que los tombos los persiguieron y les volieron plomo, por eso les toco dejar tirado el vehículo en un cañaduzal, contestando el sujeto: "bueno pero la vuelta se hizo bien" el uniformado le responde "yo creo que sí, pero lo único fue que toco dejar el carro tirado" el sujeto corta la llamada.

Una vez los uniformados llegan a la estación de policía de Jamundí con los dos capturados, argumentan que les sonó nuevamente el teléfono y que al contestar una voz femenina dijo: "pásame a Duberley", el uniformado le responde que no se lo puede pasar, insistiendo la voz femenina para que se lo pasara, recriminándole el por qué tenía el celular de Duberley, si él nunca se lo entregaba a nadie. El uniformado le manifiesta que se encuentran en un cañaduzal, ya que habían hecho una vuelta y los tombos los siguieron. Ella le pregunta que en donde se encuentran para arrimar en un carro y recogerlos, el uniformado le responde que en el puente de la morada, ella le dice que en 5 minutos pasan y efectivamente llega un taxi al puente, descendiendo dos mujeres y quedando un hombre en el vehículo, se marca inmediatamente al número que se había recibido la llamada instantes anteriores, sonándole el celular a la señora FRANCY JHOANA RUALES MONTOYA, compañera permanente del señor FRAY DUVERLE, propietario del celular hallado en el interior del vehículo abandonado, así mismo identificaron a su acompañante como YAMLE MONTOYA MONTES y al señor GUILLERMO VILLAQUIRAN quien iba conduciendo el vehículo.

Según las versiones de los policías, al estar en la conducción de estas tres personas capturadas a la estación de Policía de Jamundí, vuelve a sonar el celular figurando en la pantalla "STAR", al contestar una voz masculina le dice "que hubo marica ya salió?" responde el uniformado que no que todavía está en el cañaduzal, el sujeto le indica "marica coja por toda la rivera del rio y me sale a tecnoquímicas y yo lo recojo por la panamericana" el uniformado le dice que no, que mejor le llegue al puente de la morada que ahí está escondido, le responde el sujeto "espéreme que dentro de diez minutos llego", pasados siete minutos aproximadamente, vuelve a sonar el teléfono y la misma voz masculina que había llamado recientemente le dice "marica este pendiente que ya voy

*llegando”, pasan tres minutos cuando se observan que venían dos motocicletas, las cuales al ver a los uniformados sobre la vía disparan, respondiendo los uniformados la agresión, una de las motocicletas alcanza a devolverse para Jamundí, **la otra sigue de largo logrando ser detenida unos metros adelante, se requisa y se hace llamada al numero que figura a “star”, timbrándole a la persona que tenía retenida y conducía la motocicleta de placas FJG-51B, identificándose como CRISTIAN ALDUVER CASTRO HERNANDEZ HOY ACCIONANTE.**“*

Que ademas tenemos que en un principio y según la version de la fiscalia en su escrito de acusacion, el hoy accionante intentaba huir de la policia.

No se presenta privación injusta de la libertad, toda vez que la imposición de la medida se ajustó sustantiva y procedimentalmente a criterios de proporcionalidad y necesidad. Por cuanto al momento de la legalización de la captura se contaban con los indicios suficientes (investigación de campo, presentacion por parte de la fiscalia de una captura en flagrancia,) de estar comprometido en el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.

Que dados los indicios que pesaban sobre el aquí accionante, era natural tener una **inferencia razonable**, necesaria para imponer la medida privativa.

En el presente caso, de las pruebas documentales allegadas a la demanda, se observa que, el Juzgado con Función de Control de Garantías, impartió legalidad a la captura, conforme a los artículos 239, 240 inc. final del Código Penal e impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, solicitada por la fiscalía, conforme a los artículos 313 numeral 2 artículo 308 numerales 2 y 3, en concordancia con los artículos 310 y 312 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007. Por lo cual, las actuaciones del juzgado con función de control de garantías tuvieron respaldo legal en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que exhibió la Fiscalía, en audiencia preliminar.

En razón de lo anterior se debe agregar que las medidas las cuales profirio el juez de garantías se ajustaron a los principios de:

- **Razonabilidad:** Según el cual esta medida no fue inmotivada siempre tuvo en cuenta al denunciante, como afectado por los hechos. Hay que recordar que un acto es irrazonable cuando carezca de todo fundamento, cuando no tienda a realizar ningún objetivo jurídicamente razonable.
- **Proporcionalidad:** La proporcionalidad se compone de tres reglas que toda intervención estatal en los derechos fundamentales debe observar para poder ser considerada como una intervención constitucionalmente legítima. Estas reglas son los sub-principios de Idoneidad (o adecuación), necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y
- **La Ponderación:** es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen estructura de mandatos de optimización.

En este orden de ideas la actuación de la rama judicial dentro de la respectiva etapa procesal debe exonerarse de responsabilidad, pues se acredita que en esa etapa procesal el juez de control de garantías no realiza ninguna valoración probatoria y por lo mismo, no define la responsabilidad penal del investigado; pues se trata de un estado procesal donde la labor del juez de control de garantías se circunscribe a verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 250 constitucional, 308 de la Ley 906 de 2004 y la constatación que la medida de aseguramiento se adecuaba a los test de proporcionalidad, razonabilidad y ponderación.

Que debe resaltarse que la medida privativa fue extramural, y que era apenas natural dicha medida toda vez que se tenían serios indicios de la participación del hoy accionante en el punible, por tanto era natural vincular al hoy accionante dentro del proceso.

Además manifiesto a su despacho que no se puede cargar a la administración judicial – Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura - la falencia del ente investigador quien es el encargado de acuerdo con las pruebas legalmente obtenidas y a la evidencia física, llevar a cabo la tipificación de la conducta y, con base en ella soportar la imputación y la imposición de la medida de seguridad.

Que se debe reconocer que los motivos de la detención reposan en su integridad en la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, quien presenta las pruebas y la imputación de la conducta que tipifica al Juez de Garantías para con base en ellas, pedir y sustentar la solicitud las medidas privativas de libertad.

Que es con base en esas pruebas y evidencia física legalmente obtenidas y en la tipificación de las mismas que el juez de garantías imputa el delito y decide de acuerdo a la gravedad de dicha tipificación la imposición de medidas privativas de la libertad, no siendo el juez en esta etapa procesal un juzgador de las conductas (de la existencia o no de las mismas, ni de la participación), sino de la legalidad del procedimiento de captura y de imputación de acuerdo a las directrices del procedimentales dadas por el legislador penal.

En ese orden de ideas, en la audiencia de legalización de captura, fue la fiscalía quien tipificó la conducta con base en el material encontrado y, el juez de garantías por dicha imputación y por tratarse de un delito de tal envergadura impuso la medida de aseguramiento.

Que dentro de la investigación se puede observar la negligencia de la fiscalía, toda vez que como menciona el juez, la fiscalía no llevo a juicio investigación alguna sobre los registros de llamadas y propietarios de las líneas, siendo estas pruebas que pudiesen ser conducentes en la investigación.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL POR PRIVACIÓN INJUSTA - CORTE CONSTITUCIONAL SU-072/2018-

EXPEDIENTES T 6304188 y T 6390556 AC - SENTENCIA SU-072/18 M.P. José Fernando Reyes Cuartas COMUNICADO No. 25 Julio 5 de 2018

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD NO SE DEFINE A PARTIR DE TÍTULO DE IMPUTACIÓN ÚNICO Y EXCLUYENTE (OBJETIVO O SUBJETIVO), DADO QUE ESTE OBEDECE A LAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal específico, como tampoco lo hacen el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-037 de 1996 cuando el hecho que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad, en atención a que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que **el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso;** luego, definir una fórmula automática, rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.

Teniendo en cuenta tal circunstancia la Sala debía establecer -en ejercicio de su competencia para guardar la integridad y supremacía de la Constitución- si las decisiones judiciales cuestionadas por los accionantes y que invocaban la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ajustaban a la interpretación referida. Concluyó la Corte que determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia -aplicación del principio in dubio pro reo-, el Estado debe ser condenado de manera automática, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo del juez que determine si la decisión que restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede el precedente constitucional fijado por la Sala Plena -con ocasión del control integral y automático de constitucionalidad de la que sería la Ley 270 de 1996- concretamente en la sentencia C-037 de 1996. Consideró este tribunal que lo señalado no se opone a que otros supuestos o eventos queden comprendidos por un título de imputación de esa naturaleza, tal y como podría ocurrir, en principio, con aquellos casos en los cuales el comportamiento no existió o la conducta es considerada atípica.

Se consideró que, con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa.

EVOLUCIÓN DE LA TESIS IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN CONSEJO DE ESTADO AÑOS 2016-2018

De conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, El Consejo de Estado ya ha confirmado que la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración

Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.

A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que *“El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”*¹.

En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil² y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.

Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.

Pero, el Consejo de Estado es insistente en subrayar que lo anterior no significa que el juez de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, LAS CIRCUNSTANCIAS DEMUESTREN QUE FUE EL JUEZ O EL FISCAL, INDIVIDUALMENTE, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.³

Con respecto a las funciones del juez con funciones de control de garantías, este debe velar para que en el proceso se garanticen y protejan los derechos constitucionales del imputado, de tal suerte que, para legalizar la captura, formular la imputación y decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva, solicitada previamente por la fiscalía, debe verificar que la misma procure el cumplimiento de los fines constitucionales del artículo 250 y cumpla los requisitos del artículo 308 de la citada ley, para imponer medida de aseguramiento, que son:

“1. Que se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia: (cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación).

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima: (esto es, cuando se evidencie la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales).

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.

EXCEPCIONES

- 1. Inexistencia de daño antijurídico** toda vez que las actuaciones judiciales fueron conforme a derecho.

¹ Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.

² ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

³ CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCIÓN TERCERA; SUBSECCIÓN C; Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA; Bogotá D.C., nueve (09) de abril del dos mil dieciocho (2018).; Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00090-01(45367); Actor: ANTONIO FERNANDO MORENO LOAIZA; Demandado: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA).

2. **Ausencia de nexo causal entre el daño alegado y la actuación de los jueces de la república** la actuación de la rama judicial dentro de la audiencia de acusación solicitada por la Fiscalía debe exonerarse de responsabilidad, pues se acredita que el juez de control de garantías no realiza ninguna valoración probatoria y por lo mismo, no define la responsabilidad penal del investigado; pues se trata de un estado procesal donde la labor del juez de control de garantías se circunscribe a verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 250 constitucional, 308 de la Ley 906 de 2004 y la constatación que la medida de aseguramiento se adecúa a los test de proporcionalidad, razonabilidad y ponderación.
3. **Inexistencia de perjuicios:** Siendo ajustadas a derecho todas y cada una de las actuaciones de la Administración, no existió en ningún momento daño alguno que pueda imputársele a la Entidad que represento, y por ende no hay lugar a resarcimiento de perjuicios, por lo que dichas pretensiones deben desecharse.

PRUEBAS

- Se oficie a la Fiscalía GENERAL DE LA NACION a fin de que otorgue certificación que señale porque autoridades y por cuantas ocasiones y por cuanto tiempo ha sido investigado el DEMANDANTE.
- Que se haga traslado integral las siguientes piezas procesales:
 - Audio de la audiencia de formulación de acusación
 - Audio de la audiencia en la cual se dicta sentencia
 - Sentencia completa en instancia penal

PETICION

Se NIEGUEN las pretensiones de la demanda y se declare no responsable a la entidad que represento.

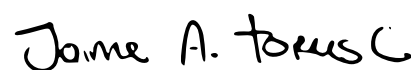
En caso de una eventual condena se Solicita realizar ponderación por separado de la responsabilidad de las entidades demandadas, todo en razón a la intensidad o impacto procesal de cada una de ellas y así evitar el favorecimiento del producción del injusto.

"Como se deduce hasta el momento queda claro que la responsabilidad predicada en la demanda la encuentra acreditada la Sala frente a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, pero no se condenará a la Rama Judicial en virtud a que esta sólo actuó en representación de la Fiscalía y esta última goza de autonomía presupuestal de conformidad con el artículo 28 de la Ley 270 de 1996.

En consecuencia dar aplicación a lo señalado en el a lo establecido en el inciso final del artículo 140 de la ley 1437 de 2011 que reza "...**EN TODOS LOS CASOS EN LOS QUE EN LA CAUSACIÓN DEL DAÑO ESTÉN INVOLUCRADOS PARTICULARES Y ENTIDADES PÚBLICAS, EN LA SENTENCIA SE DETERMINARÁ LA PROPORCIÓN POR LA CUAL DEBE RESPONDER CADA UNA DE ELLAS, TENIENDO EN CUENTA LA INFLUENCIA CAUSAL DEL HECHO O LA OMISIÓN EN LA OCURRENCIA DEL DAÑO.**" Y en la presente demanda el Juzgado Administrativo profirió sentencia de forma solidaria, sin precisar los porcentajes por los cuales debe responder cada una de las entidades.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la carrera 10 N° 12-15 Piso 2 Torre A en el Palacio de Justicia "Edificio Pedro Elías Serrano Abadía", teléfono 8986868 Ext. 1404 - 1409 y en el Correo notificaciones judiciales de la entidad dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Atentamente,


JAIME ANDRES TORRES CRUZ
C. C. No. 1.144.034.468 de Cali (Valle)
T. P. 259.000 del C. S. de la Judicatura
Cel. 3113151372



DESAJCLO20-3783
Santiago de Cali, septiembre 14, 2020

Señores
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI
Cali – Valle del Cauca

Asunto: Otorgamiento de Poder
Radicación: No. 2020-75
Medio de Control: Reparación Directa
Demandante: CRISTHIAN CASTRO y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – DESAJ

CLARA INES RAMIREZ SIERRA, mayor de edad, con domicilio en Santiago de Cali (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No. 31.962.322 de Cali - Valle, en mi calidad de representante legal de la Nación – Rama Judicial, como Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, nombrada mediante Resolución Nro. 1357 del 01 de Febrero de año 2007 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y Posesionada mediante Acta del 1º de Febrero del 2007, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996, artículo 103 numeral 7, confiero poder especial, amplio y suficiente, a **JAIME ANDRES TORRES CRUZ**, Abogado de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, con Cédula de Ciudadanía No. 1.144.034.468 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional de Abogado No. 259.000 del Consejo Superior de la Judicatura, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial en el proceso del asunto. La dirección de correo electrónico de la apoderado es galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co, misma que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

El apoderado queda facultado para desistir, sustituir, conciliar en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente la facultad de recibir.

Finalmente se recuerda, que la UNICA dirección electrónica para efectos de notificación a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), es dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Sírvase reconocer personería a la apoderada,

CLARA INES RAMIREZ SIERRA
C. C. No. 31.962.322 de Cali (V.)
Directora Ejecutiva Seccional

ACEPTO:

JAIME ANDRES TORRES CRUZ
C. C. No. 1.144.034.468 de Cali (Valle)
T. P. 259.000 del C. S. de la Judicatura
Cel. 3113151372

COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
Septiembre 22 - 2014
LWJ

Suma Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sede Administrativa

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial



Suma Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sede Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RESOLUCIÓN NO. 1357 - 1 FEB 2007

Por medio de la cual se hace un nombramiento

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL
En ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas
en el artículo 99, numeral 5 de la Ley 270 de 1.996,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar a la doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA,
identificada con cédula de ciudadanía 31.962.322 de Cali, en el cargo de
Director Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle, a partir del 1º de
febrero de 2007.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C.

- 1 FEB 2007

JUAN CARLOS DEPEZALZATE

ACTA DE POSESION

En la ciudad de Bogotá, D. C., el 1º de febrero de 2007, se presentó al
Despacho del Director Ejecutivo de Administración Judicial la doctora CLARA
INÉS RAMÍREZ SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía número
31.962.322 de Cali, con el fin de tomar posesión del cargo de Director
Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle, a partir del 1º de
febrero de 2007.

EL DIRECTOR EJECUTIVO

Presó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

LA POSESIONADA

JUAN CARLOS DEPEZALZATE
CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA

AUTENTICACION
Es real la copia tomada de los documentos que
representan en la División de Asuntos Laborales de la
Jurisdicción de Seguros Humanos de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
Septiembre 22 de 2014
LWJ

[illegible]

III DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE

உதவி

En consecuencia con lo establecido en el artículo 113 anterior, y de acuerdo con lo establecido en los Decretos Suplementarios de la Ley 14.958, se han efectuado las gestiones de no inscripción y comenza a los trabajos, oficinas y construcciones del Distrito Electoral Nacional de la Asambleadora Judicial María Clara Rodríguez, representada en la Nación, Ramiro Juárez, en los procedimientos judiciales por el cual podrá continuar su actividad profesional.

[illegible]

2107
 Carlos Jose Gomez
 Director Ejecutivo de Asistencia Social

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO 28-ENE-1967
CALIF
VALLE
LUBAS DE MONTAÑO
1.65
ENTRADA \$5 RM
F
SECO
30-AÑO-7966 CALIF
RECIBO Y LUBAS DE EXPEDICION
022-2-25
RENTAS Y RENTAS DE MONTAÑA
RENTAS Y RENTAS DE MONTAÑA

www.pearsoned.com